

Estado actual de la reforma del Estado peruano	Título
Bermúdez Valdivia, Violeta - Autor/a;	Autor(es)
Chacarera (No. 36 ene 2008)	En:
Lima	Lugar
Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán	Editorial/Editor
2008	Fecha
	Colección
Participación ciudadana; Mujeres; Derechos ciudadanos; Sector público; Descentralización; Reforma del Estado; Igualdad de oportunidades; Equidad de género; Perú;	Temas
Artículo	Tipo de documento
<a href="http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/cmp-flora-tristan/20120824124659/estado36.pdf">http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Peru/cmp-flora-tristan/20120824124659/estado36.pdf</a>	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es">http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es</a>	Licencia

**Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO**

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

**Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)**

**Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)**

**Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)**

[www.clacso.edu.ar](http://www.clacso.edu.ar)

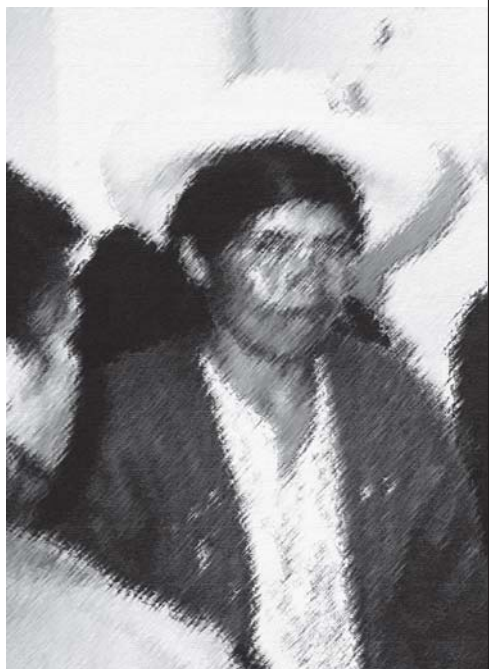


Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales  
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais  
Latin American Council of Social Sciences



## Actualidad

*El artículo da cuenta del proceso de reforma del Estado, de su avance hasta el cierre de la presente edición y las implicancias que esta reforma tiene en el acceso de los derechos ciudadanos, en especial de las mujeres.*



## Estado actual de la reforma del Estado peruano

**Violeta Bermúdez Valdivia\***

La finalidad de los Estados es organizar la sociedad a efectos de que todas las personas puedan acceder a los beneficios del desarrollo y de esta manera mejorar su calidad de vida. Esta finalidad debe tener su correlato en acciones y servicios concretos para la población. Para brindarlos de manera eficiente, todo Estado debe contar con una estructura funcional al cumplimiento de sus objetivos.

Obviamente, los Estados deben irse adecuando a los nuevos escenarios político- económicos, así como a las nuevas necesidades de su población, particularmente de aquéllas más pobres y excluidas, pues su misión central hoy es ser promotores de la equidad. Por ello, permanentemente deben reformarse, ajustar sus formas de organización, prepararse para atender las nuevas demandas y garantizar el acceso a los servicios que ha de brindar a todas las personas sin discriminación.

En el Perú, el proceso de descentralización emprendido en el año 2002 exige que nuestro Estado nacional se adecúe a un nuevo rol rector, normativo y, por qué no, supervisor del cumplimiento de las políticas públicas nacionales, dado que los gobiernos descentralizados (locales y regionales) van asumiendo cada día más funciones, competencias y programas que hasta hace poco estaban en manos del poder ejecutivo nacional.

## El proceso peruano

En este marco se inscribe precisamente el actual proceso de reforma del Estado en el Perú. En efecto, en marzo de 2007 el Presidente de la República anunció ante un auditorio de más de 200 funcionarias/os públicos los campos de la reforma emprendida por el gobierno.

En palabras del Presidente, el objetivo propuesto consiste en «cambiar el actual Estado ineficiente que gasta mucho en sí mismo, centralista y excluyente, que no rinde cuentas, es lento y atiende mal a los ciudadanos...por un Estado eficiente, austero, descentralizado e incluyente, responsable, ágil y consagrado al servicio de las personas como primer objetivo»<sup>1</sup>.

Este objetivo responde a un diagnóstico que estima que el Estado peruano no estaría cumpliendo con su finalidad central –como hemos indicado–: proveer bienestar y mejores servicios a su población. Un estudio desarrollado por Pro Descentralización-Prodes-Usaid, hace un inventario de algunos problemas actuales que enfrenta nuestro Estado<sup>2</sup>:

- Pobre en resultados.
- Duplicidad de esfuerzos y recursos.

- Lento y con problemas de corrupción.
- Desenfocado.
- Desconfiado de la ciudadanía pero también del propio Estado pues se resiste a descentralizarse.
- Con problemas de asignación de recursos.
- Sin una política de meritocracia, es decir que se premie el desempeño del personal.
- Sin metas claras y por lo tanto sin evaluaciones.
- Sin memoria institucional, lo que implica que cada cambio de administración y hasta de titular significa un nuevo inicio. No hay acumulación de las experiencias desarrolladas.
- Sin políticas claras que orienten sus acciones en todos los niveles de gobierno, que permitan señalar prioridades en el uso de los recursos y faciliten el control ciudadano.

Abordar estos problemas exige un compromiso político de las más altas autoridades; pero, también, un compromiso técnico de las/os funcionarias/os encargadas/os de poner en marcha las reformas. Del mismo modo, la ciudadanía tiene un importante rol aportando con sus propuestas, participando en los espacios de gestión pública participativa y vigilando los avances de la reforma propuesta. Para ello, resulta fundamental contar con información sobre los objetivos planteados y el avance en su cumplimiento.

## Los campos de la reforma del Estado en curso

Son tres los campos de reforma propuestos por la actual administración: i) reforma y simplificación de los trámites; ii) reforma de funcionamiento del Estado; iii) reforma de la estructura del Estado.

La *simplificación de los trámites* se orienta, sin duda, a mejorar la atención a las/os ciudadanas/os, por ello se ha avanzado en la aprobación de las leyes de licencia de funcionamiento y del silencio administrativo positivo. Esta última norma resulta relevante para promover una actuación rápida de las entidades públicas, pues su falta de respuesta en un plazo determinado ante un pedido o solicitud de las/os ciudadanas/os impli-

cará la aprobación o conformidad del pedido planteado.

En cuanto a la *reforma del funcionamiento del Estado*, las medidas trazadas buscan mejorar la gestión y el funcionamiento de las entidades públicas. Para ello se propone algunos cambios o ajustes al Sistema Nacional de Inversión Pública-Snip; el impulso y apertura a la iniciativa privada; la transparencia y honestidad en las adquisiciones; la meritocracia en la selección, contratación y evaluación de funcionarios/os públicos; el establecimiento de metas de gestión pública; el fomento del gobierno electrónico y la aplicación del presupuesto por resultados vinculado al cumplimiento de metas. A la fecha se han efectuado ajustes al Snip para hacerlo más ágil y lograr la aprobación de proyectos de inversión pública en menor tiempo, sin perder su calidad técnica; se ha creado la Oficina Nacional Anticorrupción y se ha nombrado a su titular; y se ha aprobado el presupuesto por resultados, aunque todavía limitadamente. Continúa pendiente, sin embargo, la reforma del empleo público.

La reforma de la estructura del Estado se plantea revisar y adecuar la organización del mismo de tal manera que cumpla de manera efectiva con su finalidad. Las medidas propuestas en este campo deberían orientarnos a tener una visión clara del Estado moderno y descentralizado que queremos; sin embargo –al menos hasta ahora– esto no es así.

Las veinte medidas descentralistas propuestas en octubre del 2006 se concentraron, en su mayoría, en el tema de las transferencias y en muchos casos no parecen articuladas entre sí. De otro lado, se percibe que la creación de una serie de programas como Sierra Exportadora y Agua para Todos iría en contra de la descentralización<sup>3</sup>. Aún no se ha dado respuesta al problema de la inequidad en las transferencias financieras a los gobiernos regionales y locales<sup>4</sup> y en rigor todavía no existen regiones, pues los actuales gobiernos regionales están constituidos sobre bases departamentales.

De otro lado, continúa pendiente la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo-Lope, que se espera contribuya a contar con «un nuevo marco que oriente de manera sistemática la orga-

nización, funcionamiento, responsabilidades y atribuciones del poder ejecutivo», conforme lo indica el proyecto de ley presentado por éste y permita «aclarar y delimitar competencias (precisar quién hace qué) tanto al interior del gobierno nacional como entre niveles de gobierno». Es decir, se aspira a que dicha norma asiente las bases para la definición de las responsabilidades de cada nivel de gobierno.

Dentro de las medidas en este campo, el Ejecutivo se propuso, además, la fusión de los organismos públicos descentralizados para evitar la duplicidad de competencias y cumplir las funciones asignadas con mayor eficiencia y menor gasto. En el mismo sentido se ha planteado la necesaria integración de los programas sociales y que, a su vez, estos formen parte del denominado Fondo de la Igualdad<sup>5</sup>.

### **Reforma del Estado y su impacto en políticas de igualdad**

Si bien todas las medidas propuestas tienen impacto en la efectiva promoción de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; algunas de ellas resultan más críticas para las mujeres si tenemos en cuenta que el Estado debe ser el primer promotor de la igualdad y no discriminación.

Al respecto, en el marco de la reforma de la estructura del Estado, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social-Mimdes creó la Dirección General de Protección Social, como órgano de línea dependiente del Despacho Viceministerial de la Mujer y adscribió en esta dirección las competencias y funciones del Programa Nacional Wawa Wasi, Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual y la Unidad Gerencial de Desarrollo Integral de la Familia y Promoción del Voluntariado del Programa Integral de Bienestar Familiar. Esta decisión, que se adoptó mediante Decreto Supremo N° 005-2007-MIMDES, fue evaluada por las organizaciones de mujeres y la Mesa de Mujeres Parlamentarias, como el debilitamiento de uno de los mecanismos del Estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Esta decisión del Ejecutivo generó que en el Congreso de la República se debatiera un pro-

yecto de ley para derogar el mencionado decreto supremo. Como resultado de este debate, el 30 de octubre último, la Comisión de la Mujer y Desarrollo Social aprobó por unanimidad el dictamen que propone derogar el Decreto Supremo 005-2007-MIMDES. Se espera ahora que el pleno del Congreso apruebe la mencionada norma que permitirá restituir la vigencia, funciones y competencias del Programa Nacional contra la Violencia Física y Sexual y el Programa de Cuidado de Niñas/os Wawa Wasi, que junto a la Dirección de Investigación Tutelar del Instituto Nacional de Bienestar Familiar-Inabif habían sido adscritos a la Dirección General de Protección Social del Mimdes.

De otro lado, el debate de la Lope en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado abrió espacios para la participación ciudadana, fruto de la cual diversas instituciones y personas alcanzaron propuestas para su mejora. Entre ellas, figura la integración de la perspectiva de género en la Lope<sup>6</sup>, concretamente para garantizar que la estructura del Estado responda de manera efectiva a las expectativas de todas las personas, incluidas las mujeres, con el objetivo de generar las condiciones para el cumplimiento del derecho a la igualdad y no discriminación. Y ello de acuerdo al texto constitucional y a numerosos tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano, particularmente la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer. De otro lado, la iniciativa busca armonizar la nueva Lope con lo dispuesto por la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, promulgada en marzo de 2007.

Entre las propuestas que se consideran indispensables de ser incluidas figura la importancia de garantizar una instancia rectora de las políticas de igualdad de oportunidades y equidad de género al más alto nivel; la necesidad de integrar un lenguaje inclusivo en la propuesta de Lope y de esta manera contribuir en la erradicación de un lenguaje sexista que alude al «ciudadano» o a los cargos en «masculino».

Asimismo, entre las competencias exclusivas del gobierno nacional se propone que el estable-

cimiento y la supervisión de las políticas nacionales y sectoriales de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno sean formuladas considerando, entre otros aspectos, la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación.

De la misma manera, merece destacarse que la propuesta recoge un compromiso planteado por el actual Presidente de la República durante la campaña electoral y con posterioridad a su elección, nos referimos a la conformación de un gabinete paritario. Así, se propone que la nueva Lope establezca que «el Consejo de Ministros está formado por los titulares de los ministerios designados por el Presidente de la República garantizando la participación equitativa de mujeres y hombres». Cabe indicar que si bien el último dictamen recaído en el Proyecto de Ley aludido explicita que el Consejo de Ministros está formado por «ministros y ministras» (artículo 15°), no avanza en la consagración de la paridad, es decir en establecer la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el gabinete.

En resumen, la oportunidad de una Reforma del Estado y de la aprobación de una nueva organización del mismo, exige la necesaria adecuación de estos procesos a los compromisos legales, constitucionales e internacionales que reconocen el derecho a la igualdad de la mujer en todas las esferas de la vida. Por tanto, las medidas anunciadas por el Presidente de la República deberían integrar una necesaria perspectiva de género en su desarrollo e implementación.

\*Directora Adjunta, Programa Pro Descentralización-Usaid.

<sup>1</sup> Presentación del presidente Alan García Pérez, 2 de marzo de 2007.

<sup>2</sup> PRO DESCENTRALIZACIÓN-PRODES/USAID: Lineamientos para emprender reformas en organizaciones públicas. Documento de trabajo, Lima 2007, pp. 7 y 8.

<sup>3</sup> PRODES/USAID: El proceso de descentralización: Balance y Agenda a septiembre de 2007. Lima, octubre de 2007, p.45.

<sup>4</sup> Ibidem, p.46.

<sup>5</sup> El Presidente de la República anunció la creación del Fondo para la igualdad en su mensaje del 28 de julio del 2006, cuando asumió el cargo.

<sup>6</sup> Entre ellos, el Movimiento Manuela Ramos propuso una serie de medidas a fin de integrar la perspectiva de género en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, cfr: <http://www.manuelaenelcongreso.org/>